



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés**

**A23-191**

**ASUNTO:** ordinario laboral - APELACIÓN AUTO  
**DEMANDANTE:** **ERICA ESMERALDA SALDARRIAGA DÍAZ**  
**DEMANDADO:** **ALIANZA TEMPORAL RECURSO HUMANO S.A.S. (liquidada)**  
**Litis consortes:** ALBA YANETH GUZMÁN MURILLO y DARWIN EDUARDO GRANADA MARTÍNEZ  
**RADICADO:** 05001-31-05-013-2021-00052-01  
**DECISIÓN:** **CONFIRMA auto**

**Link:** [23-191 \(013-2021-00052\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por los litis consortes contra la decisión proferida el 10 de julio de 2023 mediante la cual el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín resolvió como previa una excepción y los condenó en costas.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 32** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

Mediante demanda ordinaria laboral la señora **ERICA ESMERALDA SALDARRIAGA DÍAZ** pretende que se declare ineficaz la diligencia de descargos efectuada el 13 de julio de 2020, por ser violatoria del debido proceso, y que por ello la terminación del contrato de trabajo fue unilateral y sin justa causa. Que además, se convalide el reintegro ordenado en sentencia de tutela, teniendo presente su estado de salud y condiciones médicas, condenándose a **ALIANZA TEMPORAL RECURSO HUMANO S.A.S.**, a quien identifica como su empleador, a reconocer y pagar todos los conceptos causados durante su desvinculación, de manera indexada, además de los aportes al sistema de seguridad social integral. Subsidiariamente pretende el otorgamiento de

la indemnización por despido sin justa causa. Igualmente solicita, entre otras, las incapacidades no canceladas, diferencia insoluta de las prestaciones, la indemnización de 180 días de salario y las sanciones previstas en el art. 65 del CST y el art. 99 de la Ley 50 de 1990.

En síntesis, afirmó que laboró en la sociedad demandada como trabajadora en misión de varias empresas beneficiarias, entre el 13 de enero de 2015 y el 22 de julio de 2020, día en que, tras una diligencia de descargos telefónica, fue despedida aduciendo la no entrega de incapacidades durante aproximadamente 6 meses pese a los requerimientos efectuados, subsidios realmente inexistentes dado la negativa de la EPS, razón por la que advierte que contrario a lo dicho, en las oportunidades que reseña, solicitó su reubicación. Añade que tiene una merma del 39.7% calificada por la Junta Nacional, con fecha de estructuración del 22 de febrero de 2017, que a criterio de la Facultad Nacional de Salud Pública, asciende a 62.09%, lo que actualmente es objeto de debate en otro proceso ordinario. Igualmente, precisa que con ocasión del despido, mediante sentencia de tutela (con efectos transitorios), se ordenó su reintegro, cuyo cumplimiento no se ha materializado, aunque el empleador efectuó consignaciones deficitarias hasta enero de 2021.

En la audiencia celebrada el 26 de mayo de 2022, el juzgado ordenó la integración del contradictorio con la señora ALBA YANETH GUZMÁN MURILLO y el señor DARWIN EDUARDO GRANADA MARTÍNEZ en calidad de accionistas de la sociedad que en su momento se denominó ALIANZA TEMPORAL RECURSO HUMANO SAS, hoy liquidada, para que ejercieran el derecho de defensa, dieran las explicaciones pertinentes en relación con la liquidación, e igualmente se analizara en el marco de éste proceso judicial si existía o no alguna responsabilidad solidaria de su parte. Adujo que conforme los certificados descargados, fueron estos quienes decidieron disolver y liquidar a la demandada, con posterioridad a la notificación de esta acción, anunciando que esta carecía de pasivos y al parecer sin designar alguna reserva. De esta manera accedió a la petición elevada por el apoderado de la parte demandante en la etapa de saneamiento, quien señaló que conforme los artículos 171, 522 y 813 del Decreto 2649 de 1993, y el art. 25 de la Ley 1429 de 2010, en aquellas sociedades donde se comprobara, en contra de lo consignado en el inventario, que sí existían obligaciones con terceros no incluidas en la liquidación, los asociados eran solidariamente responsables frente a los acreedores en ejercicio de la figura llamada levantamiento del velo corporativo.

Al contestar la demanda, los convocados a juicio en calidad de Litis consorte, aclararon que los servicios de la demandante únicamente fueron prestados a la persona jurídica a la cual presentó carta de renuncia el 5 de mayo de 2021, cancelándose la respectiva liquidación. Formuló ocho

excepciones de mérito denominadas: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, pago, buena fe, cobro de lo no debido, falta de causa o de título para pedir y FALTA DE COMPETENCIA, última cimentada en que:

siempre se ha obrado de buena fe por parte de mi mandante, sin embargo es importante resaltar al despacho que el juez laboral carece de competencia para dirimir conflictos y/o situaciones comerciales contempladas en la Ley 1258 de 2008 específicamente en su artículo 42. Lo anterior teniendo en cuenta el argumento en auto donde se ordenó integrar a las personas naturales.

En providencia del 10 de julio de 2023, la a quo declaró improbadamente la excepción previa de falta de competencia y condenó en costas a ambos Litis consortes al resultar vencidos con su formulación, fijando como agencias en derecho la suma de \$580.000 a cargo de cada uno de los citados, decisión contra la cual, el apoderado de aquello, presentó recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS.**

### **2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ.**

Aclaró que la demandante NO estaba pretendiendo la indemnización de perjuicios, ni la declaratoria de actos defraudatorios de la sociedad, como se motivaba en el sustento de la excepción, ni mucho menos el levantamiento del velo corporativo, situaciones que evidentemente escapaban del ámbito de competencia del juez laboral, quien sí estaba facultado, a voces de lo estatuido en el art. 2 del CPT y la SS, para resolver el objeto de la Litis centrado en la declaratoria de ineficacia de su desvinculación alegando la titularidad del derecho a la estabilidad laboral reforzada y consecuentemente pretendía obtener el reintegro junto con el pago de determinadas acreencias, derivadas de la relación laborales con la sociedad hoy liquidada, no así con las personas naturales convocadas al proceso como Litis consortes, ante los hechos sobrevinientes al verificarse, en ejercicio del control de legalidad, la liquidación de quien la demandante identifica como empleador, con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, lo que no impedía la continuidad del trámite dado la reserva que debía constituirse según lo previsto en el art. 245 del Código de Comercio. Destaca que, pese a que la actora posteriormente conoció el estatus de liquidada de la sociedad accionada, NO reformó la demanda.

Que como los accionistas fungieron como liquidadores de la demandada, su integración tenía como finalidad garantizarles el derecho de defensa respecto de la obligación de constituir la mencionada reserva.

Estimó que conforme lo previsto en el art. 32 del CPT y la SS, era este el momento procesal oportuno para resolver la excepción formulada, la que de acuerdo a lo normado en el art. 100 del CGP, tenía el carácter de previa, al margen de la denominación que hiciese la parte, máxime si el juez debía ser director del proceso.

Por las razones expuestas mantuvo incólume su decisión.

## **2.2. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE**

Expresamente indicó que:

Con el debido respeto, yo no presenté excepción previa... estoy en este momento verificando el escrito y yo presenté excepciones de mérito... y no presenté como previa la de falta de competencia.

Interpongo el recurso de apelación contra la decisión que acaba de tomar, teniendo en cuenta que dentro del expediente efectivamente se dio contestación pero como excepción de mérito, más no como excepción previa conforme lo fue a resolver la señora juez en este momento, por lo anterior solicito que se reconozca el recurso de apelación para que sea resuelto por el tribunal, para que el tribunal revoque el auto proferido por el despacho de primera instancia, teniendo en cuenta que la excepción fue propuesta como excepción de mérito y no previa, y bajo ese orden de ideas, no sea condenada en costas los Litis consortes.

## **2.3. ALEGATOS**

Ninguna de las partes presentó alegatos.

## **3. PROBLEMA JURÍDICO**

Se circunscribe a determinar si es acertada la decisión de la quo de resolver como previa la excepción de falta de competencia y consecuentemente establecer si debe revocarse la condena en costas a cargo de quien formuló el medio exceptivo.

## **4. CONSIDERACIONES**

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 3º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *decida sobre excepciones previas*.

Ahora, generalmente en este tipo de asuntos suele atacarse lo decidido por la primera instancia respecto a la excepción formulada, es decir, el fondo del asunto; si se niega, la parte resistente se opone alegando que debe declararse probada; si por el contrario se accede a lo pretendido, la parte accionante ataca lo decidido.

No obstante, *sui generis* resulta lo aquí acontecido, toda vez que el apoderado de los Litis consorte NO está discutiendo el fondo del asunto, NO está señalando las razones por las cuáles el despacho carece de competencia o por qué sí debió declararla probada, únicamente destaca que otra era la naturaleza del medio exceptivo, que por ende NO podía la juez pronunciarse tempranamente, y en virtud de ello, NO podía condenarlos en costas.

Ciertamente, si atendemos la literalidad del texto, en parte alguna de la contestación de la demanda se formula una excepción previa, únicamente la falta de competencia ocupa el octavo lugar de las excepciones enlistadas como de mérito.

Empero, el recurrente olvida que otra connotación previó el legislador cuando en el art. 100 del CGP estatuyó que la falta de competencia era una excepción previa. En tal sentido, pierde relevancia el nombre con el que se bautice al formularla, máxime de cara a los poderes del juez como director del proceso, de ahí que el estudio en la audiencia de que trata el art. 77 del CPT y la SS, realmente se centre en los hechos que fundamentan cualquier excepción cuyo análisis deba adelantarse en esa etapa.

Y es que en el derecho procesal las excepciones NO son sanciones, sino remedios para subsanar las falencias que se presenten, de ahí que a través de ellas se busque depurar el proceso, y su formulación, desde esta óptica, ha de beneficiar al demandante porque se identifica oportunamente un vicio, impidiendo la emisión de una sentencia inhibitoria, pues se trata de un defecto de forma del acto jurídico que es saneable. Y es que el fin de todos los actos es que el proceso llegue perfectamente desarrollado al punto de dictar sentencia de mérito, de ejercer la jurisdicción para resolver el litigio planteado. Por eso hay formas que, aunque se desvíen, por definirlo de alguna manera, NO necesariamente ameritan la invalidación de lo actuado, o dan al traste con el trámite de la acción.

Frente al tema el tratadista Hernán Fabio López Blanco, en su obra *Código General del Proceso Parte General*<sup>1</sup>, adujo que:

La excepción previa no se dirige contra las pretensiones del demandante, sino que tiene por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante sobre bases que aseguren la ausencia de causales de nulidad, llegando incluso a ponerle fin a la actuación sino se corrigieron las irregularidades procesales advertidas o si estas no admiten saneamiento. La excepción previa busca que el demandado, desde un primer momento, manifiesta las reservas que pueda tener respecto de la validez de la actuación, con el fin de que el proceso, subsanadas las irregularidades, se adelante sobre bases de absoluta firmeza, corrigiendo, de paso, fallas por omisión en las que incurrió el juez, porque es lo cierto que éste a través de las facultades de inadmisión de la demanda puede desde un primer momento obtener el saneamiento del proceso, deber que persiste a lo largo del mismo.

(...) Como ya se dijo, las previas sólo buscan asegurar que se adelante un proceso sin vicios que lo afecten, que de no corregirse oportunamente podrían entrañar la nulidad de la actuación, lo cual va en beneficio no sólo del demandado sino de todos los que intervinieron en el proceso.

En este orden de ideas, atendiendo la finalidad de la excepción, si en la contestación se formula la falta de competencia, incomprensible resulta que el recurrente considere que el juez debe esperar hasta la sentencia para su resolución, si a la luz de lo normado en el art. 138 del CGP, su declaratoria puede conllevar la nulidad de lo actuado o de la sentencia emitida. Recuérdese que la competencia es la autoridad para conocer y decidir sobre un asunto, y bajo esta óptica es un presupuesto procesal, un requisito indispensable para el nacimiento válido del proceso, es decir, una condición previa para que el proceso exista y se pueda proferir sentencia estimatoria válida; en otras palabras, es un antecedente necesario para que el juicio tenga una validez formal de modo que la demanda pueda ser impulsada hasta emitirse una sentencia que decida el litigio.

Bajo este contexto, considera la Sala que las precisiones hechas por la a quo sobre la forma como debe estudiarse la demanda es plenamente válida, pues un juez como director del proceso tiene la facultad de sanear el mismo para evitar, como se dijo, la emisión de sentencias inhibitorias, este es precisamente el objetivo de la audiencia consagrada en el artículo 77 de la Ley 1149 de 2007, que se denomina “*Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio*”, etapas íntimamente ligadas entre sí, evacuadas en una sola audiencia y todas buscan la misma finalidad: eliminar cualquier defecto que pueda generar una nulidad o una sentencia inhibitoria, y el funcionario judicial está facultado para tomar las medidas pertinentes y sanear el proceso o enmendar una indebida enunciación de la parte resistente, sin suplantar el querer de la peticionaria, de ahí que la a quo hubiese sido clara en reiterar cuales eran las pretensiones de la demanda, y porqué según lo normado en el

---

<sup>1</sup> DUPRE Editores. Bogotá DC – Colombia, 2016, páginas 948 y 949.

art. 2 del CPT y la SS, era competente para resolverlas, desechando de esta manera, una eventual nulidad.

En todo caso, la Juez se encuentra facultada para realizar el respectivo control del proceso, y como verdadera directora del mismo, claramente está facultada para darle el alcance pertinente al medio exceptivo que se formule, examinándolo como previo.

*Verbi gracia*, la Corte Suprema de Justicia, cuando existen *oscuridades* en la demanda, ha sido clara en indicar que corresponde a los jueces realizar un análisis sistemático y armónico, aplicando la normativa que corresponda a una determinada realidad fáctica, sin que se encuentre limitado por la invocación que hagan las partes. *Mutatis mutandi*, la misma intelección ha de aplicarse al caso que nos convoca.

Consecuencialmente, era factible que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del art. 365 del CGP, se condenara en costas a la parte a quien se le resolvió de manera desfavorable la *formulación* de una excepción previa, y aunque en sentido estricto la falta de competencia NO fue rotulada como previa, como se dijo, realmente sí lo es, sin que sea dable al operador jurídico engeguerse frente a tal circunstancia, omitiendo su resolución en la audiencia regulada en el art. 77 del CPT y la SS.

Ahora, si lo pretendido fuese atacar la tasación de las agencias en derecho, habría de precisarse que el artículo 366 del C.G. del P. estableció que “*Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior...*”, y en el numeral 5 de dicho artículo se indica que “*La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo **podrán controvertirse** mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas*”, lo que significa que la oportunidad para interponer el recurso de apelación contra la liquidación de agencias en derecho no es otra que una vez notificado el auto de aprobación de las mismas. Bajo esa óptica, la Sala tendría que abstenerse de efectuar análisis atinente al monto.

Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por el despacho. Se condenará en costas al recurrente por NO haber tenido éxito en el recurso, fijándose como agencias en derecho la suma de \$300.000 a prorrata, a favor de la demandante.

**4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA SEGUNDA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE**

**PRIMERO. CONFIRMA** la decisión adoptada mediante auto del 10 de julio de 2023 proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ERICA ESMERALDA SALDARRIAGA DÍAZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.687.442 contra la sociedad **ALIANZA TEMPORAL RECURSO HUMANO S.A.S. (liquidada)**, trámite al que fueron vinculados como Litis consortes la señora ALBA YANETH GUZMÁN MURILLO y el señor DARWIN EDUARDO GRANADA MARTÍNEZ, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


**SEGUNDO.** Costas en esta instancia a cargo del recurrente (Litis consortes). Se fija como agencias en derecho la suma de \$300.000 a prorrata, y a favor de la demandante.

Lo resuelto se notificará por **ESTADOS** y se dispone devolver el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 164 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>